

RESUMEN

Los mil y un gastos de la UE que financian el islam y la inclusión

INTERNACIONAL

19_01_2026



**Lorenza
Formicola**



Mientras la Unión Europea atraviesa una fase de tensión permanente —entre crisis geopolíticas, transiciones industriales incompletas y perjudiciales, presión inflacionista y restricciones presupuestarias—, una parte significativa de los recursos comunitarios

sigue destinándose a un conjunto articulado de proyectos dedicados a la integración islámica y a la valorización identitaria de minorías religiosas y étnicas específicas. Se destinan nada menos que 32 millones de euros a iniciativas relacionadas con el islam, la cultura islámica y la prevención de la islamofobia. La lista de proyectos es tan extraña como preocupante. Y es importante llegar hasta el fondo.

Una de las financiaciones más controvertidas se refiere a un proyecto coordinado por la **Universidad de Gante**, en Bélgica, que ha obtenido 2 millones de euros para una investigación que tiene el siguiente título: *Cabello, identidad, belleza e identidad personal en el contexto musulmán: paisajes emocionales y feminidad en evolución más allá del velo*. El objetivo declarado es analizar el papel del peinado y el cuidado del cabello en la vida cotidiana de las mujeres musulmanas. ¿Cuál podría ser el sentido cultural de este tipo de investigaciones? La sensación generalizada es que se ha traspasado la frontera entre la investigación y el simbolismo ideológico, con iniciativas que se perciben como autorreferenciales y desconectadas de las necesidades urgentes y reales de la sociedad europea.

Junto a este proyecto, la Unión Europea ha destinado más de 3 millones de euros a una serie de iniciativas relacionadas con la lucha contra el odio antimusulmán. Los títulos de los programas delimitaban claramente el ámbito de actuación: “Alianzas sostenibles contra el odio antimusulmán”, “Un modelo hacia una cultura no discriminatoria” o “Denuncia y documentación del racismo antimusulmán”.

En Italia, una parte de estos fondos se ha destinado a proyectos destinados a combatir lo que se denomina “la subestimación de los discursos de odio dirigidos a las mujeres musulmanas, mediante campañas de sensibilización, recopilación de datos y actividades formativas”.

En este contexto también se inscriben financiaciones mucho más importantes en términos económicos: unos 10 millones de euros para el proyecto conocido como “**Corán europeo**” y otros **17 millones** destinados a iniciativas relacionadas con el islam, la *sharia*, la cultura y las tradiciones islámicas, distribuidos en varias líneas de financiación en el marco de los programas europeos de investigación e inclusión.

Este flujo de recursos se inscribe en un contexto económico y político marcado por crecientes dificultades para los presupuestos nacionales, hasta el punto de parecer casi paradójico. Mientras que el procedimiento de déficit excesivo (PDE) se cierne sobre los Estados miembros como instrumento de supervisión y disciplina fiscal, limitando la capacidad de gasto público e imponiendo elecciones selectivas, paralelamente se

multiplican las denuncias de financiaciones europeas percibidas como alejadas de las urgencias cotidianas de las familias y las empresas: el coste de la vida, la competitividad industrial, la seguridad de los territorios.

También porque, mientras Bruselas se dedica a combatir la supuesta islamofobia generalizada, los datos más recientes ofrecen un panorama dramático y alejado de las prioridades de la UE en lo que respecta a la libertad religiosa mundial: el último informe de *Open Doors* señala que en 2025 habrá **388 millones** de cristianos perseguidos en el mundo, ocho millones más que el año anterior, y que 4849 personas serán asesinadas *in odium fidei*. A pesar de su gravedad, estas cifras difícilmente encuentran un espacio proporcional en el debate público europeo.

Y eso no es todo. En el marco de los programas europeos 2022-2027, otro capítulo se refiere a la integración de las comunidades romaníes. La Comisión Europea ha asignado **2,2 millones de euros** a nueve proyectos presentados como *estratégicos*, basados en el objetivo de la inclusión social y la lucha contra la discriminación. Los fondos se han distribuido a una red de asociaciones, en su mayoría italianas, encargadas de traducir el marco teórico de la integración en iniciativas operativas.

Entre ellos, se han asignado **200.000 euros** a un proyecto dedicado a las rutas europeas del patrimonio cultural romaní. Una parte de 38.000 euros se ha destinado a una asociación con sede en Lanciano, con el objetivo de dar visibilidad a conciertos, exposiciones, conferencias y talleres relacionados con la cultura romaní.

Otros 60.000 euros se han destinado a un proyecto de inclusión a través del tenis, presentado como una herramienta de educación cívica capaz de transmitir valores como el respeto por las reglas, la lealtad competitiva y la gestión de la derrota. Según los documentos del proyecto, el número total de participantes y formadores supera ligeramente las sesenta unidades, por lo que el coste medio se aproxima a los mil euros por persona.

La financiación más importante se destina a la salud mental: **700.000 euros** para un programa destinado a mejorar el acceso a los servicios de apoyo psicológico para las comunidades romaníes en Rumanía, Bulgaria y Hungría. Los objetivos incluyen influir en las políticas públicas nacionales y aumentar la concienciación dentro de las comunidades.

Le sigue un proyecto de más de 320.000 euros dirigido a jóvenes romaníes y no romaníes para combatir el “antigitanismo”, un fenómeno que, según encuestas

europeas, sería una de las principales causas de exclusión de la vida cívica y escolar. Por lo tanto, si los romaníes en Italia no van a la escuela, todo es culpa del racismo.

Quienes deciden trasladarse a Europa, a menudo de forma irregular, ya acceden a sistemas de acogida que suponen costes importantes para los territorios anfitriones. A este coste, día tras día, descubrimos que se añade una autotributación colectiva adicional para financiar programas de integración que, a menudo, parecen más orientados a satisfacer una necesidad política de autolegitimación que a otra cosa.

Visto lo visto, cabe preguntarse hasta qué punto la Unión Europea puede seguir invirtiendo miles de millones en proyectos sectoriales y simbólicos, persiguiendo diversos derechos, mientras que para los ciudadanos europeos —los que financian el sistema con su trabajo y sus impuestos— los recursos son siempre insuficientes, especialmente cuando se trata de recortes fiscales. ¿O es solo porque los impuestos sirven ahora para financiar todo esto y poco más?